



## Cecilia Soto González

Analista política  
 cecillasotog@gmail.com

# Ni picha ni cacha ni deja batear

Uno de los cien compromisos de la actual Presidenta es el desarrollo de un auto eléctrico, compacto, de precio accesible, diseñado principalmente para el mercado interno. Ya existe una fábrica en Puebla que produce bajo pedido el auto eléctrico Zacua. Por eso llamó la atención del gobernador electo poblano, Alejandro Armenta, que la señora Sheinbaum ignorara la inversión poblana y se refiriera a un auto Olinia, que sería producido en Sonora y que la totalidad de sus componentes serían producidos en México. El cien por ciento. No pude dejar de recordar los proyectos de los reactores nucleares cien por ciento hechos en la India o los reactores totalmente argentinos o los aviones y computadoras totalmente brasileños. Casi siempre esos proyectos fueron de gobiernos militares nacionalistas de la década de 1960 y casi siempre fracasaron o fueron modificados.

El ejemplo sirve bien para iluminar la miopía del actual proyecto industrial del gobierno. Aunque Olinia, el carrito eléctrico, sería principalmente para el mercado interno, su producción estaría en Sonora, a unos dos mil kilómetros de los principales mercados nacionales. ¿Por qué? Desde que se nacionalizó la producción de litio, el decreto que acompaña esta decisión exige el control por parte del Estado de todas las etapas de la cadena de producción y explotación del litio. Así, las baterías del Olinia tendrán que ser de litio sonoreño, hechas por una compañía del gobierno y si se permitiese inversión minoritaria privada en ésta, el Consejo de Administración tendría que ser presidido por un funcionario del gobierno mexicano. Litiomex no existe más que en el papel y en los salarios que paga a sus funcionarios. Tomando en cuenta la experiencia de los pocos proyectos que hay en el mundo de litio en roca de arcilla, tardaremos en tener producción de litio varios años. Y baterías más años.

Añada usted las gasolineras del Bienestar, el banco del Bienestar, las farmacias del Bienestar, que compiten con ventaja con los emprendimientos privados. O Mexicana de Aviación, cuyas tarifas no pagan ni la turbosina que necesitan sus aviones.

La Presidenta explicó recientemente su concepción del papel del gobierno en la economía nacional: “Una de las grandes tareas del gobierno... es que las empresas públicas recuperen su papel como motor de la economía nacional, que las dejaron abandonadas en todo el periodo neoliberal, particularmente el sexenio de 2012 a 2108”. Hay varias maneras de interpretar este

deseo. Una es que el sector exportador que ha sido en las últimas décadas el sector más dinámico y moderno de la economía deje de serlo para ser reemplazado por Pemex y la CFE, y la constelación de empresas gubernamentales que se han venido creando desde el sexenio del primer piso. No es imposible frenar el motor exportador de nuestra economía: los aranceles con los que amenaza el presidente electo Trump van en esa dirección. Lo mismo que la falta de energía resultado de seis años de no invertir lo suficiente en nuevas plantas, transmisión y distribución e impedir que el sector privado lo haga. Ni picha ni cacha.

La concepción de las empresas públicas, CFE y Pemex, como motor de la economía —un motor desviado en el caso de la empresa petrolera—, revela, además, un prejuicio en contra de los empresarios y una idea atrasada y pequeña de la economía nacional. El sector exportador puede mejorar cualitativamente aumentando el contenido nacional, que sigue siendo modesto y que, en efecto, depende exageradamente de importaciones chinas. Esta nueva orientación podría resultar positiva en las duras negociaciones con el equipo del presidente electo norteamericano. El Estado no tiene que sustituir al empresario como sueña la Presidenta, pero sí puede estimular y acompañar esta transformación premiando la innovación, el establecimiento de centros de diseño en México, el trabajo conjunto de empresas con los centros educativos para formar personal con las habilidades técnicas del futuro. El Estado también puede y debe fortalecer las capacidades de investigación nacionales y la formación de investigadores y técnicos de la mayor calidad. Reducir el presupuesto de universidades y centros de investigación es darse un tiro en el pie.

La CFE y Pemex tienen problemas financieros de la mayor seriedad. Tecnológicamente, ambas empresas están firmemente en el pasado energético que queremos dejar atrás. Poco a poco podrían salir de terapia intensiva. Su transformación tecnológica no es inmediata. No les demos una responsabilidad de motores de la economía que no pueden cumplir ni siquiera para sí mismas. Nos espera un periodo difícil con el próximo inquilino de la Casa Blanca y un equipo económico que no cree en el libre comercio, que es adicto a los aranceles y que tiene el incentivo de imponerlos por mensaje político y porque representarían en lo inmediato recursos fiscales adicionales. Mensajes estatistas, aunados a la pérdida de autonomía de los órganos autónomos, no contribuyen a enviar un mensaje positivo a nuestros posibles aliados dentro de Estados Unidos.